



46/2026

27 de abril de 2026

Sergio Estrada González

**Libia (2011-2025): anatomía de un fallo estratégico y sus secuelas en la seguridad del flanco sur**

## Libia (2011-2025): anatomía de un fallo estratégico y sus secuelas en la seguridad del flanco sur

### Resumen:

La intervención militar en Libia en 2011, liderada por la OTAN bajo la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), constituye un paradigma de éxito táctico y fracaso estratégico. Este documento analiza cómo la mutación de una misión de protección civil en una campaña de cambio de régimen, ejecutada sin planificación posconflicto, precipitó el colapso de las estructuras estatales libias. Se examinan las consecuencias sistémicas de este vacío de poder, desde la fragmentación interna hasta la conversión de Libia en un teatro de competición entre grandes potencias en el Mediterráneo central. Asimismo, se evalúa críticamente el modelo operacional de «huella ligera» (*Light Footprint*), argumentando que la dependencia exclusiva del poder aéreo y de fuerzas subrogadas resulta insuficiente para garantizar la estabilización del terreno. Finalmente, el análisis extrae lecciones para la seguridad nacional española y europea, subrayando la necesidad de estrategias integrales que trasciendan la acción cinética.

### Palabras clave:

Libia, OTAN, responsabilidad de proteger, estrategia, huella ligera, seguridad regional, Sahel, posconflicto.

**\*NOTA:** Las ideas contenidas en los *Documentos de Opinión* son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

## *Libia (2011-2025): Anatomy of a strategic failure and its aftermath on Southern Flank security*

### *Abstract:*

*The 2011 military intervention in Libya, led by NATO under the Responsibility to Protect (R2P) doctrine, constitutes a paradigm of tactical success and strategic failure. This paper analyzes how the mutation of a civilian protection mission into a regime change campaign, executed without post-conflict planning, precipitated the collapse of Libyan state structures. The systemic consequences of this power vacuum are examined, ranging from internal fragmentation to the conversion of Libya into a theater of great power competition in the Central Mediterranean. Furthermore, the «Light Footprint» operational model is critically evaluated, arguing that exclusive reliance on air power and proxy forces proves insufficient to guarantee ground stabilization. Finally, the analysis draws lessons for Spanish and European national security, underscoring the need for comprehensive strategies that transcend kinetic action.*

### *Keywords:*

*Libya, NATO, Responsibility to Protect, Strategy, Light Footprint, Regional Security, Sahel, Post-conflict.*

### **Cómo citar este documento:**

ESTRADA GONZÁLEZ, Sergio. *Libia (2011-2025): anatomía de un fallo estratégico y sus secuelas en la seguridad del flanco sur*. Documento de Opinión IEEE 46/2026. [enlace web IEEE](#) y/o [enlace bie<sup>3</sup>](#) (consultado día/mes/año)

## Introducción

La intervención en Libia en 2011 marca un punto de inflexión crítico en la historia de la seguridad internacional del siglo XXI. Ejecutada bajo el amparo de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas<sup>1</sup> y la entonces emergente doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), la operación *Unified Protector* se presentó inicialmente como una respuesta humanitaria urgente para detener la violencia contra la población civil. Este principio normativo, la R2P, diseñado para obligar a la comunidad internacional a actuar cuando un Estado es incapaz de evitar atrocidades masivas contra su propia población, sufrió en Libia una crisis de legitimidad irreversible. Su rápida mutación en una herramienta de cambio de régimen fue interpretada por Rusia, China y gran parte del sur global como una instrumentalización geopolítica de los derechos humanos<sup>2</sup>. Esta percepción ha tenido un coste diplomático devastador, ya que el «precedente libio» es el argumento que Moscú y Pekín han esgrimido sistemáticamente para vetar cualquier resolución posterior en el Consejo de Seguridad (notablemente en Siria), paralizando el intervencionismo humanitario occidental bajo la premisa de que la R2P se ha convertido en un «caballo de Troya» para vulnerar la soberanía nacional.

A más de una década de distancia, y con la perspectiva que otorga el escenario geopolítico a finales de 2025, el caso libio se erige como un estudio de caso paradigmático sobre las limitaciones del poder militar cuando se aplica desconectado de una estrategia política integral. La caída del Estado libio no solo generó un vacío de poder interno, sino que detonó una reacción en cadena que desestabilizó la región del Sahel y transformó el Mediterráneo central en un vector de amenazas híbridas. Para España y el conjunto de la Unión Europea, las consecuencias de este «fallo sistémico»

---

<sup>1</sup> La Resolución 1973 (2011) autorizaba en su párrafo 4 «todas las medidas necesarias» para proteger a la población civil, pero excluía explícitamente «una fuerza de ocupación extranjera de cualquier forma en cualquier parte del territorio libio». Esta restricción legal creó una paradoja operativa, permitiendo a la OTAN destruir la capacidad estatal del régimen, pero impidiéndole desplegar las fuerzas terrestres necesarias para asegurar el orden inmediato tras el colapso, garantizando así el vacío de poder.

<sup>2</sup> Véase *House of Commons Foreign Affairs Committee*. «Libya: Examination of intervention and collapse and the UK's future policy options». Tercer Informe de la Sesión 2016–17. El informe concluye explícitamente que la amenaza a civiles fue exagerada y que los objetivos políticos limitados de la intervención derivaron en una política oportunista de cambio de régimen.

son directas y tangibles, desde la crisis de los flujos migratorios y la inseguridad energética, hasta la irrupción de competidores estratégicos en el flanco sur de la OTAN<sup>3</sup>.

El presente análisis tiene como objetivo examinar las incoherencias estratégicas que definieron la intervención y sus secuelas. A través de un enfoque geopolítico, se evaluará la brecha entre los medios militares empleados y los fines políticos alcanzados, analizando cómo la ausencia de planificación posconflicto facilitó la atomización del país y la penetración de potencias externas. Lejos de ser un ejercicio meramente histórico, este análisis busca extraer lecciones operativas y subrayar la necesidad de repensar los modelos de gestión de crisis en la vecindad estratégica europea.

### **Contexto interno y regional previo a la intervención**

Para analizar el impacto de la intervención de 2011, es necesario examinar previamente la configuración política y socioeconómica del Estado libio en ese momento. El sistema vigente, denominado oficialmente *Jamahiriyah*<sup>4</sup>, se fundamentaba en una estructura política no convencional que prescindía de partidos políticos y de una constitución formal, organizando la administración a través de una red de comités populares y congresos básicos. Esta arquitectura supuso, en la práctica, la inexistencia de instituciones burocráticas estatales homologables a las de los sistemas representativos occidentales o a las de otros regímenes autocráticos de la región.

En el plano socioeconómico, los indicadores de 2010 reflejaban una situación de estabilidad macroeconómica sustentada en la renta de los hidrocarburos. Según el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de ese año, Libia ocupaba el puesto 53 a nivel mundial y el primero del continente africano. El Estado mantenía un nivel de deuda externa prácticamente

---

<sup>3</sup> Véase GOBIERNO DE ESPAÑA. *Estrategia de Seguridad Nacional 2021*. El documento identifica la inestabilidad en el Magreb y el Sahel como una de las principales amenazas para la seguridad nacional, subrayando la interconexión entre los conflictos en la «Frontera Avanzada» y la seguridad interior europea.

<sup>4</sup> Neologismo árabe traducible como «Estado de las masas», acuñado por Muamar el Gadafi en su *Libro Verde* (1975) para definir la estructura política de Libia. Basado en la llamada «Tercera teoría universal», este sistema abolía formalmente la democracia representativa y los partidos políticos, bajo la premisa de que «la representación es un fraude», en favor de una supuesta democracia directa ejercida a través de comités populares.

nulo y gestionaba un fondo soberano, la *Libyan Investment Authority* (LIA), con activos estimados en 67.000 millones de dólares.

En términos de infraestructura y servicios básicos, los datos evidenciaban un desarrollo significativo respecto a las décadas anteriores. La tasa de alfabetización, que rondaba el 25 % en 1969, había aumentado al 89,2 % en 2010. Asimismo, el proyecto del «Gran Río Artificial», una red de ingeniería hidráulica diseñada para transportar agua desde los acuíferos fósiles del sur, abastecía al 70 % de la población urbana de la franja costera. Estas prestaciones formaban parte de un contrato social implícito, en el que la distribución de la renta petrolera garantizaba la paz social y la lealtad de las diversas confederaciones tribales.

La arquitectura de seguridad, factor clave para entender el colapso posterior, se caracterizaba por una dualidad operativa. Por un lado, las Fuerzas Armadas regulares se mantenían deliberadamente limitadas en capacidad y equipamiento. Por otro, la defensa efectiva del sistema recaía sobre unidades de élite paramilitares y sobre los aparatos de inteligencia interior. Esta configuración buscaba evitar la concentración de poder militar autónomo que pudiera desafiar al liderazgo político.

En consecuencia, el Estado libio de 2011 no operaba a través de instituciones impersonales y jerarquizadas, sino mediante una red centralizada de relaciones personales y equilibrios tribales que convergían exclusivamente en la figura del líder. Esta característica estructural implicaba que el aparato estatal carecía de mecanismos de funcionamiento autónomo; la eliminación de la cúspide del sistema no conllevaría simplemente un cambio de gobierno, sino la desarticulación funcional de los mecanismos de seguridad, administración y control territorial del país.

### **Intervención militar y legitimación internacional**

Fue precisamente sobre el escenario de fragilidad institucional descrito anteriormente donde impactó, en marzo de 2011, una intervención internacional diseñada bajo premisas que ignoraban la realidad sociopolítica del terreno. Mientras la disolución de la *Jamahiriya* requería una sustitución sistémica compleja y un compromiso de seguridad robusto, la respuesta occidental optó por una aproximación minimalista, profundamente

condicionada por el hastío bélico de las opiniones públicas tras las largas campañas de Irak y Afganistán.

El marco jurídico de esta respuesta se estableció el 17 de marzo del 2011 con la aprobación de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El texto, redactado bajo la lógica de la emergencia humanitaria, autorizaba «todas las medidas necesarias» para proteger a la población civil, pero excluía explícitamente el despliegue de una fuerza de ocupación extranjera. Esta ambigüedad en el mandato permitió una rápida mutación de los objetivos estratégicos sobre la marcha. Lo que comenzó técnicamente como la imposición de una zona de exclusión aérea para detener el avance de las columnas blindadas del régimen sobre Bengasi, se transformó *de facto* en una campaña de apoyo aéreo ofensivo destinada a facilitar el cambio de régimen.

Bajo el paraguas de la OTAN y la denominación operativa *Unified Protector*, la Alianza Atlántica ejecutó una campaña aérea de alta intensidad que se prolongó durante siete meses. Las estadísticas finales ilustran la magnitud del esfuerzo cinético desplegado. Se contabilizaron más de 26.000 salidas aéreas, de las cuales aproximadamente 9.600 fueron misiones de ataque directo. La superioridad tecnológica occidental fue absoluta desde los primeros compases, logrando la supresión total de la defensa antiaérea libia en las primeras 72 horas y el desmantelamiento sistemático de los nodos de mando, control y logística de las fuerzas leales a Gadafi.

Sin embargo, esta innegable eficacia táctica y tecnológica ocultaba un defecto doctrinal profundo, conocido como «huella ligera» (*Light Footprint*). Esta doctrina, defendida principalmente por la Administración Obama bajo el lema de «liderar desde atrás», se fundamentaba en la externalización del combate terrestre a fuerzas locales subrogadas (*proxy warfare*). La estrategia asumía, erróneamente, que las milicias rebeldes —una amalgama heterogénea de desertores, civiles armados e islamistas— podrían cohesionarse de forma orgánica en una fuerza de seguridad nacional una vez eliminado el dictador.

Este enfoque generó una distorsión estratégica inmediata: el problema del «riesgo moral». Al proporcionar cobertura aérea ilimitada a actores no estatales sin imponer una cadena de mando unificada ni mecanismos de responsabilidad política, la OTAN alteró decisivamente la balanza militar, pero perdió la capacidad de influir sobre la conducta de los vencedores. La Alianza destruyó las capacidades coercitivas del Estado desde el

aire, pero al carecer de presencia física en el terreno, se quedó sin instrumentos para evitar las represalias, las ejecuciones sumarias —incluida la del propio Muamar el Gadafi en Sirte— y el saqueo masivo de los arsenales estatales.

La consecuencia última de negar el despliegue de una fuerza de estabilización posconflicto (*boots on the ground*) fue la fragmentación irreversible del monopolio de la fuerza legítima. En el momento de la victoria, la legitimidad política no recayó sobre el Consejo Nacional de Transición (CNT), sino sobre los cientos de *katibas* o brigadas armadas que habían ocupado físicamente el territorio y las instituciones.

En definitiva, la intervención de 2011 demostró que la tecnología de precisión permite ganar guerras asimétricas, pero es incapaz, por sí sola, de construir la paz. La doctrina de la «huella ligera» logró derrocar al régimen con un coste occidental mínimo en vidas y recursos, pero lo hizo a costa de transferir todo el riesgo de seguridad a la población civil libia, condenando al país a un vacío de poder que, como se analizará a continuación, se convirtió rápidamente en una amenaza para toda la región.

### **Consecuencias estratégicas**

La caída del régimen de Muamar el Gadafi no supuso el fin de la violencia ni el advenimiento de una transición democrática ordenada, sino el inicio de una atomización del poder que desbordó las capacidades de las nuevas autoridades de transición. La decisión estratégica de dismantelar el aparato de seguridad del Estado sin disponer de una fuerza de reemplazo cohesionada provocó que el monopolio de la violencia se fragmentase en una miríada de milicias, grupos tribales y facciones islamistas. Esta dispersión de la autoridad impidió la consolidación de un gobierno central efectivo, convirtiendo a Libia en un Estado fallido donde la legitimidad política quedó subordinada a la capacidad de coacción armada de actores no estatales, perpetuando un ciclo de inestabilidad que imposibilitó cualquier intento de reconstrucción institucional durante la década posterior.

Esta implosión interna tuvo una traducción inmediata y devastadora en el entorno regional, confirmando los temores sobre la permeabilidad de las fronteras norteafricanas. El saqueo masivo de los arsenales estatales libios, estimados en miles de toneladas de armamento convencional y sistemas portátiles de defensa aérea, alimentó una

proliferación armamentística sin precedentes que fluyó libremente hacia la franja del Sahel<sup>5</sup>. Este flujo descontrolado de capacidades militares actuó como un multiplicador de fuerzas para grupos insurgentes y organizaciones yihadistas en países vecinos, precipitando crisis de seguridad severas como la rebelión tuareg y el posterior golpe de Estado en Malí en 2012<sup>6</sup>. De este modo, el vacío de seguridad en Libia dejó de ser un problema contenido para convertirse en el epicentro de un arco de inestabilidad que ha comprometido gravemente los esfuerzos de estabilización europeos en el Sahel y ha incrementado la presión sobre las fronteras meridionales de Europa.

A este vacío de seguridad contribuyó decisivamente lo que podría definirse como una «cacofonía estratégica» en el seno de la Unión Europea. La incapacidad comunitaria para proyectar estabilidad no se debió únicamente a la falta de instrumentos, sino a una profunda divergencia de intereses nacionales que paralizó la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Francia e Italia, las dos potencias con mayor influencia histórica en la zona, fueron percibidas, según múltiples análisis, como apoyando *de facto* a bandos opuestos. Mientras Roma tendió a respaldar al Gobierno de Trípoli, en parte para asegurar el control migratorio y los activos de la energética ENI, París ofreció apoyo político y de inteligencia al mariscal Haftar en el este, a quien diversos observadores consideraban un posible baluarte frente al yihadismo en el Sahel, en un contexto en el que también estaban en juego los intereses energéticos vinculados a Total. Esta parálisis europea transformó el Mediterráneo central en un escenario de suma cero, donde la falta de cohesión occidental no solo debilitó la posición negociadora de Bruselas, sino que despejó el camino para que actores externos llenaran el vacío político.

Así pues, la consecuencia más profunda a largo plazo ha sido la transformación del territorio libio en un teatro de competición entre potencias ajenas a la alianza atlántica. La mencionada ausencia de un plan de estabilización occidental generó un vacío estratégico que evolucionó drásticamente en la última década. La traducción cartográfica

---

<sup>5</sup> Véase CONFLICT ARMAMENT RESEARCH (CAR). «Investigating Cross-Border Weapon Transfers in the Sahel». *EU-funded Report*. Esta investigación de campo traza la «cadena de custodia» del armamento, demostrando que la falta de mecanismos de seguridad física y gestión de arsenales posconflicto en Libia fue el factor determinante para el rearme de AQMI y otros actores no estatales en la región.

<sup>6</sup> Véase UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. *Final Report of the Panel of Experts established pursuant to resolution 1973 (2011) concerning Libya (S/2012/163)*. El informe documenta exhaustivamente cómo los sistemas portátiles de defensa aérea y el armamento ligero del arsenal de Gadafi fueron transferidos a grupos armados en el Sahel, actuando como catalizador directo para la rebelión tuareg del MNLA y la posterior toma del norte de Malí por grupos yihadistas en 2012.

del colapso estatal posterior a 2011 revela un escenario de atomización extrema que perduró hasta bien entrada la guerra civil. Hacia finales de 2018, la ausencia de una autoridad central efectiva había transformado la geografía política de Libia en un mosaico de feudos locales. Mientras las zonas costeras permanecían disputadas por los dos gobiernos rivales, la vasta región meridional del Fezán operaba como un «*hinterland*»<sup>7</sup> ingobernable. En este vacío, milicias tribales y grupos armados transnacionales gestionaban el territorio y los tráfico ilícitos con total autonomía, al margen de la disputa entre Trípoli y Tobruk, facilitando la permeabilidad de las fronteras con el Sahel.

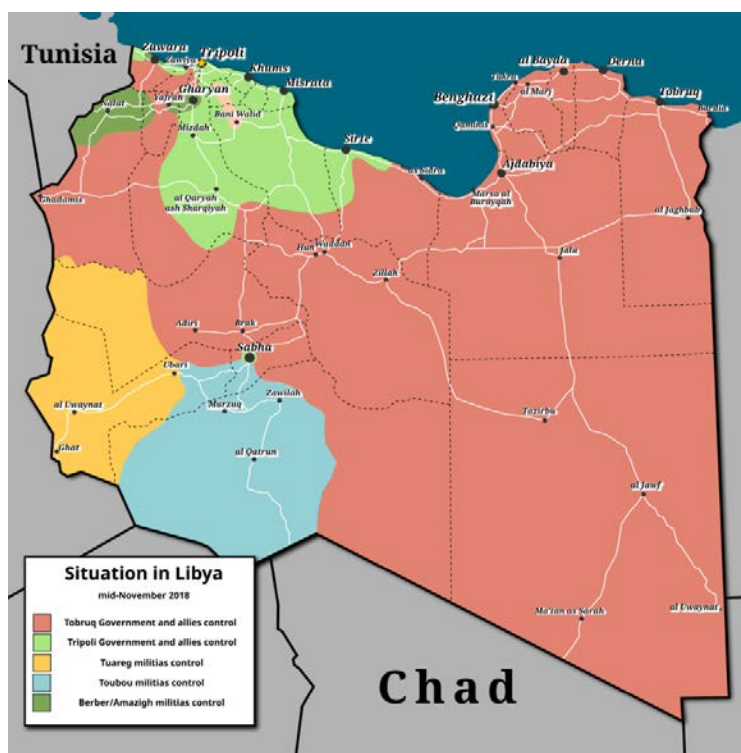


Ilustración 1. Mapa de la fragmentación territorial en noviembre de 2018. Disponible en Wikimedia Commons.  
 URL: <https://w.wiki/GbN3>

<sup>7</sup> Término geopolítico de origen alemán (*Hinterland*, literalmente «tierra posterior») que designa la profundidad territorial o zona de influencia situada tras los centros neurálgicos costeros. En el análisis del conflicto libio, el concepto hace referencia a las vastas extensiones desérticas del Fezán y la franja meridional que, debido a su lejanía de los núcleos de poder político y económico de la costa (Trípoli y Bengasi), operan históricamente con dinámicas de autonomía tribal y escasa penetración de la autoridad estatal.

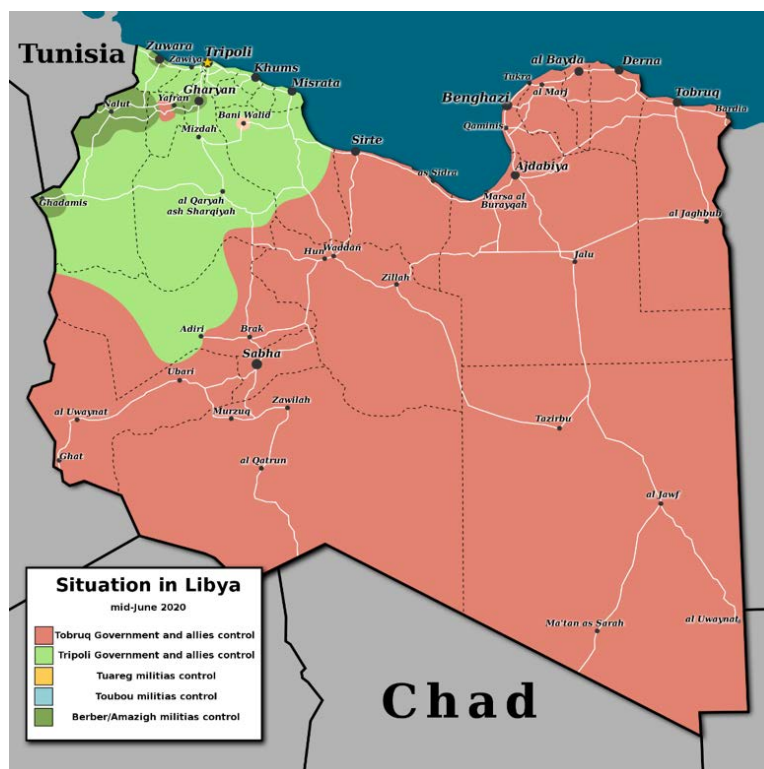


Ilustración 2. Mapa de la fragmentación territorial en junio de 2020 tras la internacionalización del conflicto. Disponible en Wikimedia Commons. URL: <https://w.wiki/GbMt>

La comparativa visual entre los teatros de operaciones de 2018 y 2020 ilustra la drástica mutación del conflicto, que evolucionó desde esta fase de atomización miliciana hacia una guerra civil convencional de alta intensidad. La ofensiva lanzada por el Ejército Nacional Libio (LNA), en enero de 2019, para asegurar los campos petrolíferos del sur, forzó una realineación de lealtades, absorbiendo a los actores locales bajo la estructura de mando del Mariscal Haftar y eliminando las «zonas grises» tribales. Este movimiento estratégico, preludio del asedio a Trípoli en abril de 2019, polarizó el país en dos bloques monolíticos. Sin embargo, la intervención militar directa de Turquía en 2020 en favor del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) revirtió el avance del LNA, empujando el frente de vuelta hacia el centro del país. En apenas dos años, Libia pasó de ser un archipiélago de ciudades-Estado a convertirse en un escenario binario de competición geopolítica, donde la autonomía de los actores locales quedó subordinada a la logística y los intereses de sus patrocinadores internacionales.

El estancamiento de la línea del frente en el eje Sirte-Jufra, tal como se consolidó a mediados de 2020, representa la cristalización de dos esferas de influencia extranjera en

el Mediterráneo central. Por un lado, el GNA en Trípoli, reconocido por la ONU, sobrevivió gracias a la intervención militar directa de Turquía, que desplegó drones y asesores para proteger sus intereses marítimos en el Mediterráneo. Por el otro, el LNA del mariscal Haftar, asentado en el este (Tobruk/Bengasi), consolidó su ofensiva gracias al apoyo logístico de Egipto y a la fuerza de choque de los mercenarios rusos del Grupo Wagner, punta de lanza de la estrategia del Kremlin para afianzarse en el flanco sur de la OTAN. Esta nueva configuración establece capacidades militares avanzadas y sistemas de negación de área (A2/AD) a escasos kilómetros de Europa, otorgando a estos competidores estratégicos una capacidad de presión política inédita mediante la instrumentalización de los flujos migratorios y de los recursos energéticos<sup>8</sup>.

Mientras el período 2011-2020 se caracterizó por la violencia cinética, el lustro posterior (2021-2025) se puede definir como una fase de «estancamiento sistémico». La esperanza de una transición democrática colapsó definitivamente el 24 de diciembre de 2021, fecha en la que debían celebrarse unas elecciones presidenciales y parlamentarias que fueron suspendidas *sine die* por falta de consenso constitucional. Este fracaso reactivó la bicefalia ejecutiva, cristalizando la división entre el GNU en Trípoli, liderado por Abdul Hamid Dbeibah, y el GNS en el este, designado por la Cámara de Representantes y alineado con el LNA del mariscal Haftar.

Esta nueva fractura no ha derivado en una guerra civil total gracias, paradójicamente, al «equilibrio del terror» impuesto por los patrocinadores externos. Turquía y Rusia han dejado de ser meros interventores para convertirse en los garantes del *statu quo*. Moscú, en particular, ha institucionalizado su presencia. Tras la disolución del Grupo Wagner, sus activos han sido absorbidos por el *Africa Corps*, según diversos análisis, integrado en estructuras dependientes del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, consolidando una plataforma de proyección estratégica hacia el Sahel y el Mediterráneo central que ya no depende de contratistas privados, sino de la política exterior estatal del Kremlin.

---

<sup>8</sup> Véase MEGERISI, T. «Libya's Global Civil War», *European Council on Foreign Relations (ECFR)*. 2019. El autor documenta cómo el vacío diplomático y militar dejado por la Unión Europea y EE. UU. permitió la consolidación de un «condominio ruso-turco» en Libia. Ambas potencias gestionan ahora la intensidad del conflicto para maximizar su influencia regional, desplazando a Europa a un rol de observador irrelevante en su propia frontera sur.

No obstante, esta parálisis se ve agravada por una bicefalia financiera que actúa como motor del estancamiento institucional. La disputa por la legitimidad y el control de la *National Oil Corporation* (NOC) y el Banco Central de Libia constituye el verdadero centro de gravedad estratégico del país. Al no existir un presupuesto unificado ni mecanismos de transparencia, las élites políticas de ambas facciones han encontrado en el bloqueo institucional un negocio muy lucrativo. Esta desarticulación financiera impide que la renta de los hidrocarburos se traduzca en servicios básicos, fomentando una economía de guerra donde el acceso a las divisas se utiliza para asegurar la lealtad de las redes de milicias, dejando al Estado como una estructura hueca e incapaz de gestionar su propio territorio.

La consecuencia más trágica de esta parálisis política no es diplomática, sino humanitaria. El colapso de las presas de Derna tras el paso de la tormenta Daniel en septiembre de 2023, que causó miles de muertos, no fue un desastre natural, sino el resultado empírico del «Estado sin Estado». La negligencia en el mantenimiento de infraestructuras críticas, fruto de la corrupción y la disputa de competencias entre las dos administraciones rivales, evidenció que el fallo estratégico de 2011 sigue cobrándose vidas. La incapacidad de coordinar una respuesta de emergencia unificada demostró que, bajo la fachada de un conflicto congelado, la erosión de las capacidades estatales ha llegado a un punto de no retorno.

## Conclusiones

El ciclo de conflicto en Libia (2011-2025) constituye un caso de estudio paradigmático sobre los límites de la intervención militar occidental en el siglo XXI. Catorce años después de la operación *Unified Protector*, la evidencia confirma que la caída del régimen de Gadaffi mediante una estrategia de *Light Footprint* fue un espejismo operacional, donde un éxito táctico indiscutible terminó precipitando un fracaso estratégico absoluto. Si bien la operación demostró la capacidad de la OTAN para proyectar fuerza aérea con precisión y detener una amenaza inminente contra civiles, el vacío estratégico que siguió a la caída del régimen de Gadaffi evidenció una desconexión fatal entre la planificación militar y la gestión de la posguerra. La decisión de dismantelar las estructuras estatales sin disponer de un plan de estabilización no liberó a la sociedad libia, sino que la condenó

a una atomización violenta, demostrando que la eliminación de un dictador es una condición insuficiente para la democratización si no va acompañada de una arquitectura institucional de reemplazo y un compromiso de seguridad a largo plazo.

La realidad actual de Libia ya no es la de una transición en disputa, sino la de un estancamiento institucionalizado. El fracaso de las elecciones de 2021 y la consolidación de la bicefalia entre el GNU en Trípoli y el GNS en el este del país confirman que las élites políticas han encontrado en el bloqueo mutuo un *modus vivendi* lucrativo. Sin embargo, el coste de este «empate infinito» lo paga la población civil y la propia viabilidad del Estado. La tragedia de Derna en 2023, donde la negligencia política y la falta de mantenimiento de infraestructuras críticas costaron miles de vidas, sirve como el recordatorio más doloroso de que un territorio sin Estado unificado es incapaz de proteger a sus ciudadanos, convirtiendo amenazas naturales en catástrofes humanitarias.

Desde la óptica geopolítica, el vacío dejado por la irrelevancia europea y estadounidense ha sido ocupado por potencias revisionistas. Libia ha pasado de ser una zona de interés para la OTAN a convertirse en la cabeza de playa de la influencia rusa en África. La transformación en 2024 del Grupo Wagner en el *Africa Corps* indica que Moscú ya no busca solo beneficios económicos mediante mercenarios, sino una proyección militar permanente en el flanco sur de la Alianza, controlando bases aéreas y rutas energéticas clave.

En el plano normativo global, la gestión de la crisis libia infligió un daño severo a la doctrina de la R2P. La percepción de que la intervención humanitaria amparada por la Resolución 1973 se utilizó como un pretexto para ejecutar un cambio de régimen, erosionó la confianza diplomática necesaria para futuras acciones multilaterales. Este precedente ha sido utilizado sistemáticamente por potencias como Rusia y China para vetar resoluciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en crisis posteriores, como la de Siria, argumentando que la R2P se había convertido en una herramienta de ingeniería política occidental. En consecuencia, la intervención en Libia no solo fracasó en estabilizar el país, sino que debilitó sustancialmente el consenso internacional sobre los mecanismos de protección de civiles, dejando un legado de parálisis diplomática que perdura hasta la actualidad.

La lección operacional de Libia es que la tecnología y la superioridad aérea no son sustitutos viables de la estrategia política. El modelo de «guerra a distancia» puede ser efectivo para misiones punitivas o de contraterrorismo selectivo, pero resulta estructuralmente inadecuado para operaciones de cambio de régimen o protección de civiles, donde el control del territorio y la gestión de la población son las variables determinantes del éxito.

Para la Unión Europea, y específicamente para España, las lecciones son severas pero ineludibles. La seguridad del Mediterráneo no puede depender de equilibrios frágiles pactados por terceros actores. Los intereses nacionales son tangibles y van más allá del control migratorio; la resiliencia de empresas estratégicas como Repsol, que ha reanudado su actividad exploratoria en la cuenca de Murzuq pese a la incertidumbre, demuestra que Libia sigue siendo un socio energético irrenunciable. En consecuencia, la estrategia futura no debe limitarse a la contención de amenazas, sino avanzar hacia una diplomacia realista que exija la reunificación de las instituciones financieras, especialmente el Banco Central y la NOC, como condición previa e indispensable para cualquier ayuda. Se debe entender que la recuperación de la caja única no es un mero trámite administrativo, sino la piedra angular para restaurar un monopolio de la fuerza legítimo; sin este control financiero centralizado, Libia carecerá de los incentivos internos para la estabilidad y seguirá siendo un exportador neto de inseguridad para toda la región.

*Sergio Estrada González\**

Estudiante del Máster de Geopolítica y Estudios Estratégicos de la Universidad Carlos III de Madrid

[@\\_sergioestrada\\_](#)